

CARLOS OMINAMI

Editor

CLAROSCURO

DE LOS GOBIERNOS PROGRESISTAS

América del Sur:
¿Fin de un ciclo histórico
o proceso abierto?

Celso Amorim • Alicia Bárcena • João Brant • Marco Aurelio García
Alberto Fernández • Manuel Antonio Garretón • Horst Grebe • Elisabet Gerber
Guillermo Mastrini • Constanza Moreira • José Natanson • Carlos Quenan
Álvaro Sáenz • Ernesto Samper • André Singer • Mario Wainfeld

Catalonia

CHILE: EL ENTRAMPAMIENTO DEL PROYECTO REFUNDACIONAL Y LOS DESAFÍOS DEL PROGRESISMO*

MANUEL ANTONIO GARRETÓN M.

El propósito de estas páginas es pensar la problemática actual del progresismo en nuestras sociedades a partir del caso chileno, en particular del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.

El contexto latinoamericano

Recordemos que a la salida de las transiciones, democratizaciones, primeros impactos de la globalización, reformas neoliberales, aparición de nuevas identidades e irrupción de nuevas tecnologías de la información, los países latinoamericanos se enfrentaron a la disyuntiva de mantener los esquemas postransicionales o de dar un salto, en términos de lo que estaba en el horizonte, que calzaba muy bien en lo que la Cepal llamó el problema fundamental de la sociedad latinoamericana: la desigualdad o la falta de cohesión social. Es interesante resaltar que en los años noventa, con el planteamiento de la cuestión de la transformación productiva propuesta por la Cepal, la problemática era básicamente económica. Y 20 años después el tema de la Cepal es la igualdad, con lo que redefinía una de las dimensiones del desarrollo sustentable esbozada en los noventa¹.

* Este trabajo se basa en la presentación hecha en el XI Foro Anual del Progresismo. Fundación Chile 21 y Fundación Friedrich Ebert. Santiago, 24 de noviembre 2016.

1 Cepal, *Transformación productiva con equidad. La tarea prioritaria de América Latina y el Caribe en los noventa*, 1990; Cepal, *La hora de la igualdad. Brechas por cerrar, caminos por abrir*, 2010.

Prácticamente casi todos los países, en uno o en otro momento, dieron un salto posneoliberal, postransición y de reinserción autónoma en la globalización, lo que buscaba recomponer las relaciones entre el Estado y la sociedad y tenía como horizonte la igualdad. Todos los países que están en esta reunión, excepto Chile, buscaron dar este salto, que tuvo una expresión significativa en lo que se llamó el *giro a la izquierda* y que implicaba tanto la redefinición de nuevas relaciones entre el Estado y la sociedad como también la constitución de un sujeto político-social que asumiera dicha tarea². Hoy asistimos a la crisis de ambas situaciones: a la de aquellos países que intentaron ese salto (con la excepción, a mi juicio, de Uruguay y Bolivia, que parecen relativamente exitosos); Brasil, Argentina y Venezuela, que experimentan crisis tanto del modelo ensayado, en el que estuvo ausente la generación de un nuevo modelo productivo, como sobre todo del sujeto que intentó dar el salto. Pero esta crisis ocurre también, por otras razones, en los países que en los años posautoritarios no intentaron dar el salto más allá de los procesos de democratización, como México, Perú y Chile³.

La particularidad del caso chileno

Los sujetos sociales de los países que dieron el salto cambian respecto de las transiciones, aunque hayan sido parte de la coalición democratizadora. Se generan otras coaliciones u otro sujeto político-social para realizar el salto.

El caso chileno⁴ tiene la particularidad de no haber hecho el salto porque su sujeto político-social, es decir, quien dirigió los procesos

2 Ver, para un estudio de varios casos, "Edición ganadora del Concurso de Clacso: Contrapuntos en torno a los nuevos Gobiernos progresistas de América Latina". *Temas y Debates*, n.º 20. Argentina: Universidad Nacional de Rosario, octubre 2010.

3 He desarrollado más este punto en *Las ciencias sociales en la trama de Chile y América Latina. Estudios sobre transformaciones sociopolíticas y movimiento social*. Santiago: LOM Editores, 2014.

4 Un análisis de la primera mitad del gobierno de Bachelet en "El proyecto de transformación y la crisis político-institucional de la sociedad chilena. El Gobierno de Bachelet entre 2014 y 2016". En: Claudio Arqueros y Álvaro Iriarte (eds.), *Chile y Latinoamérica. Crisis de las izquierdas del siglo XXI*. Andros Impresores.

de democratización, orientado más en términos de corrección del modelo neoliberal y menos en términos de su superación, no cambió ni modificó su proyecto. Hay varias razones que permiten explicar esto. Entre ellas mencionemos: la incapacidad del trabajo político intelectual para mostrar a dónde llevaba la continuidad del ciclo democratizador; la trampa del éxito en la coalición democratizadora que había realizado muy significativas transformaciones; la falta de renovación de las élites y la ausencia de una alternativa desde la izquierda menos centrada en la sola protesta y en la pura capitalización del descontento. En todo caso, el sujeto llamado Concertación de Partidos por la Democracia (o simplemente Concertación, alianza de centroizquierda) no intentó sino tardíamente, como veremos y a través de una nueva coalición denominada Nueva Mayoría, una transformación también relativa para buscar superar las relaciones vigentes entre Estado y sociedad y recomponer un nuevo orden socioeconómico y político.

¿En qué consistía, en el caso chileno, enfrentar la problemática histórico-estructural que atravesaba a América Latina? Recordemos que el proyecto histórico de la Concertación fue realizar el término de la dictadura y superar el modelo de sociedad heredado de la ella, pero solo realizó correcciones de este⁵. Vale la pena recordar que el único país que heredó un modelo de sociedad de la dictadura fue Chile. Vestigios de la dictadura que no sea la dimensión represiva no parecen ser los aspectos principales en la conformación de la sociedad o en los diversos ámbitos que la constituyen, en Brasil, Argentina o Uruguay. En cambio, en el caso chileno, todo —modelo económico y social, sistema educacional, de salud, previsional, laboral, organización de las ciudades, acceso a recursos naturales y organización de las regiones— es herencia de la dictadura y eso se expresa en que es el único país que tiene una Constitución impuesta por aquella, aunque corregida parcialmente en democracia. Dicho de otra manera, el país que más necesitaba dar el salto a que nos hemos referido para superar la sociedad heredada de la dictadura —lo que hemos denominado la "sociedad pospinochetista"— es el único país que no lo intentó. Esta percepción no la tuvo la élite dirigente de la Concertación, por las razones señaladas más arriba.

5 Ver M. A. Garretón, *Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los Gobiernos de la Concertación en Chile (1990-2010)*. Santiago: Clacso-Arcis-El Desconcierto, 2012.

Y así, en 2011-2012, por primera vez en la historia del Chile de los años treinta en adelante, apareció una situación en que un proyecto histórico se planteaba desde la sociedad.

La constitución clásica del sujeto político-social

En efecto, hasta ese momento nunca hubo un proyecto histórico que viniera de los movimientos sociales o de fuera de los partidos, sino que siempre provino de un complejo constituido por partido, Estado, universidad, intelectualidad y organizaciones sociales, pero cuyo núcleo articulador era el sistema partidario. En esto consistía el modo de ser chileno: en la imbricación, no fusión o manipulación, entre política y sociedad, particularmente del sistema partidario con los actores sociales, fueran estos de clases populares o medias, federaciones de estudiantes, sindicatos, pobladores o campesinos⁶. Siempre que se decía "partido", hasta probablemente mediados de la década del 2000, se hablaba también de uno o varios sectores de la sociedad. Esta relación se mantuvo durante la dictadura, con represión y muchos problemas, pero es evidente que las movilizaciones que se despliegan desde 1983 son impensables sin la acción de los partidos políticos, como también es impensable sin estos la movilización en torno del plebiscito de 1988 para terminar con la dictadura⁷.

Este modo de ser, esta manera de constituirse como sociedad y como país, a través de la política más que por la economía o por elementos puramente sociales o simbólicos, por supuesto privilegió ciertas categorías sociales y relegó a otras, como las mujeres y los indígenas.

Así, los grandes proyectos históricos: la industrialización, la vía chilena al socialismo, la reforma agraria y la lucha contra la dictadura, todos habían sido iniciativas planteadas desde los partidos. En algunos casos

6 El análisis de esta matriz sociopolítica clásica en el caso chileno ha sido desarrollado en varios textos. Más recientemente, en: Garretón, *Las ciencias sociales...*, capítulo 8.

7 Sobre las movilizaciones de la época, un antiguo artículo del autor, "Movilización popular bajo el régimen militar en Chile. De la transición invisible a la democratización política". En: Susan Eckstein (coord.), *Poder y protesta popular. Movimientos sociales latinoamericanos*, México, DF: Siglo XXI Editores, 2001.

vinieron desde coaliciones de partidos. En el caso de la reforma agraria propuesta en el programa del Gobierno demócratacristiano de Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, la reclamación por la división de tierras no era lo central de la demanda campesina, sino que ello fue planteado desde la política. Pero cuando se dice que se trataba de uno o varios partidos, en ellos siempre están presentes, sin duda con relativa autonomía, organizaciones e instituciones sociales, culturales o de otros ámbitos.

El surgimiento de un proyecto refundacional

Señalábamos más arriba que lo que ocurre en 2011-2012 es que por primera vez en la historia de Chile aparece un actor o sujeto que no se identifica con ni está constituido por el sistema partidario, y que se ha ido separando de los actores políticos de la transición y postransición. Este actor nuevo, formado por movimientos sociales y cuyo liderazgo es del movimiento estudiantil, precedido por la acción contra las hidroeléctricas en la Patagonia y acompañado por otras durante 2011 y parte del 2012, configura una inédita situación, en que se plantea un proyecto histórico desde el movimiento social. Tal proyecto planteaba tres grandes reivindicaciones, que apuntaban a los ejes del modelo socioeconómico, cultural y político heredado de la dictadura⁸.

En primer lugar, se trata de la reforma del sistema educacional, síntesis, a la vez, de los modelos socioeconómico y cultural vigentes⁹. En efecto, Chile había vivido una revolución única en el mundo que lo hizo pasar de un sistema educacional de más de tres cuartos de educación pública, a principios de los setenta, a uno con más de tres cuartos en la educación privada regida por el mercado, en los diferentes niveles. La importancia de esta transformación es que, como ha señalado la OCDE, el sistema educacional chileno tenía como objetivo el generar desigualdades, lo que puede decirse del conjunto del modelo socioeconómico. Un modelo que se basa fundamentalmente en el mercado como eje predominante y sin regulación es uno por definición destinado a generar

8 Sobre la significación de las movilizaciones de 2011-2012: Garretón, *Las ciencias sociales...*, capítulo 11.

9 Ver OCDE, *Informe Chile sobre educación escolar*. Santiago: OCDE, 2004.

desigualdad. Esta revolución neoliberal fue hecha a sangre y fuego por la dictadura y sus principios y mecanismos fueron corregidos, pero no superados por los Gobiernos de la Concertación¹⁰.

El segundo tema que plantea el movimiento estudiantil es la reforma tributaria, que implica dos cosas. Por un lado, la cuestión de generar nuevos recursos, en la frase con la cual la élite política cooptó la idea de la reforma, "allegar recursos para realizar la reforma educacional", pero, por otro lado, disminuir las desigualdades en la distribución de la riqueza en un país que aparecía con los índices más altos de desigualdad comparado con otros de su mismo nivel de desarrollo¹¹.

El tercer tema, consecuencia en parte de la imposibilidad de realizar las reivindicaciones anteriores debido al sistema político institucional vigente, era ya no una nueva reforma constitucional, sino una nueva Constitución que reemplazara la actual, considerada ilegítima¹².

El mundo político entendió esto y lo tradujo en los términos de lo que sabe hacer ante la eventualidad de elecciones presidenciales: un programa de gobierno. Prácticamente todos los candidatos presidenciales el 2013, con la excepción de los de derecha, plantearon estas propuestas de reforma en sus programas. Y particularmente la candidata de la Concertación, Michelle Bachelet, asumió un compromiso muy serio con ellas. Entonces, el actor que había perdido la última elección ante el candidato de derecha, el expresidente Piñera, busca no solo recuperar el gobierno, sino hacer un programa de transformación, refundacional, el salto que no se había dado y que sí habían dado los otros países. Ello lo hace basado en los planteamientos del movimiento social. Y para eso había que ampliar la coalición, lo que significaba que se incorporara a esta la principal colectividad de izquierda que nunca había sido parte, el Partido Comunista, cuyo papel político había sido diferente tanto en la lucha contra la dictadura, al incluir una dimensión armada, como

10 He planteado la necesidad de refundación del sistema educacional chileno en "Por la refundación del sistema de educación". En *Revista Anales de la Universidad de Chile*. Séptima Serie n.º 7, 2014.

11 Para una explicación de la reforma tributaria en Chile, desde una perspectiva oficialista, véase capítulo IV del libro de Alberto Arenas, *Sostenibilidad fiscal y reformas tributarias en América Latina*. Santiago: Cepal, 2016.

12 Sobre una nueva Constitución, véase, entre otros, Varios Autores, *Plebiscito para una nueva Constitución*. Santiago: Editorial El Desconcierto, 2013.

en el período posautoritario, en el que se había concentrado en catalizar el descontento social durante los gobiernos de la Concertación. Esta incorporación, a su vez, significaba ampliar el programa a un cuarto punto central, la reforma laboral, reposicionando la cuestión del trabajo como tema fundamental para superar el modelo neoliberal, lo que provocará una fuerte resistencia de los sectores patronales frente a ella. Se constituye, así, un programa basado estrictamente en las movilizaciones con algunas ampliaciones como la señalada y otras que tienen que ver con el sistema político-electoral, libertades, derechos de género y ampliación de lo público.

La paradoja estriba en que, pese a ampliarse el sujeto político partidario que debía asumir el proyecto planteado desde las movilizaciones, se produce la más baja participación político-electoral de la historia contemporánea chilena. Es difícil encontrar una mejor prueba de la ruptura del modo clásico de constitución de los actores y sujetos sociales^{13 14}.

Las contradicciones del proyecto del Gobierno de Bachelet

El proyecto encabezado por el Gobierno de Bachelet era de carácter refundacional en el sentido de que, como hemos indicado, buscaba sustituir principios y estructuras generadas por la dictadura, para recuperar los principios democráticos y de inclusión de la sociedad chilena y para alcanzar mínimos estándares socioeconómicos y éticos. Es precisamente la percepción de este carácter lo que llevó a enfrentar muy fuertes resistencias, como nunca había ocurrido en Chile desde la época de la Unidad Popular, por parte de la derecha y los poderes mediáticos y fácticos, como los grandes sectores empresariales, a los que se agregaban, en temas educacionales y de libertades, las principales entidades eclesásticas.

A la oposición de los partidos de derecha y los poderes mencionados, se agregaron otros tres problemas que contribuyeron al empantamiento del proyecto refundacional.

13 Ver una síntesis de lo realizado por el Gobierno de Bachelet y un balance de su programa en la última cuenta pública, Mensaje del 1 de junio de 2017.

14 Ver los diversos trabajos contenidos en M. A. Garretón, *La gran ruptura. Institucionalidad política y actores sociales en el Chile del siglo XXI*. Santiago: LOM Ediciones, 2016.

Por un lado, más allá de cuestiones de gestión en el interior del mismo Gobierno, el gran error del Gobierno de Bachelet, propio de la tradición política chilena, es no haber puesto el tema político como el central y fundamental para después entrar a los problemas de contenido. No lo hizo Allende con la vía chilena al socialismo; no lo hizo Frei Montalva con la reforma agraria, en que se aisló de la izquierda y derecha; y no lo hizo Aylwin al comienzo del período democrático respecto de los enclaves autoritarios. En el caso de Bachelet no se puso, al comienzo de su período, el tema constitucional, que había alcanzado legitimidad en el año electoral de 2013 y que habría permitido compensar la falta de participación en las elecciones. Las reformas impulsadas (tributaria, educacional y sistema electoral, por nombrar algunas) durante su primer año de gobierno, sin embargo, dejaron planteada esta cuestión para inicios de 2015, pero los escándalos de la relación entre política y dinero que afectaron a miembros de la familia y del gabinete de la presidenta y la baja en su aprobación popular debilitaron la capacidad para completar las reformas y para impulsar con mayor fuerza el proceso constituyente.

Por otro lado, hay que mencionar la incapacidad del sujeto político, la Nueva Mayoría (la antigua Concertación más el Partido Comunista), de ser un conductor político. Hubo siempre un sector al interior de la coalición —grupos de la Democracia Cristiana que lograron hacerse hegemónicos en el seno de esta— que no aceptaban un proyecto refundacional o de cualquier tipo que no fuera dirigido por ellos o que afectara intereses propios o de su base de apoyo, como sucedía, por ejemplo, con el sector educacional privado subvencionado.

Finalmente, la relativa naturalización del modelo socioeconómico y cultural en los llamados sectores medios emergentes, que los llevó, canalizados por la derecha y por los sectores mencionados en el interior de la Nueva Mayoría, a oponerse a las mismas reformas que habían apoyado en la época de las movilizaciones sociales¹⁵. Volveremos sobre esta cuestión más adelante.

¹⁵ Sobre estos sectores medios ver Carlos Ruiz y Giorgio Boccardo, *Los chilenos bajo el neoliberalismo. Clases y conflicto social*. Santiago de Chile: Nodo XXI/EI Desconcierto, 2014.

La ruptura entre institucionalidad política y sociedad

Así, el proyecto refundacional no encuentra un sujeto político capaz de llevarlo coherentemente a cabo y de constituirse en quien explica a la sociedad las dificultades que tiene un proyecto de este tipo. Porque a la gente, acicateada por los poderes fácticos y mediáticos, no le gusta sentir que pierde algo conquistado o que no va a obtener lo que desea, sea esto efectivo o no. Por ello necesita un intermediario que interactúe con ella “explicando” la vinculación que hay entre demandas cotidianas y la construcción de la polis. Si no hay eso— y en este caso el intermediario es el sujeto político partidario, es decir, la Nueva Mayoría o un movimiento social que intermedia entre el Gobierno y la gente—, la suma de movilizaciones al final puede convertirse en demandas estrictamente individuales, particulares, corporativas y contradictorias con el sentido de las transformaciones que se plantearon originalmente en las movilizaciones de 2011-2012, a las que nos hemos referido.

Quizás el ejemplo más dramático de esto sea lo ocurrido con el movimiento estudiantil que en su momento organizó el conjunto de demandas sociales, especialmente lo referido a la demanda por gratuidad universal de la educación superior, tema que fue recogido por el Gobierno. Porque, planteada la gratuidad universal (objetivo, por lo demás, elemental en la sociedad contemporánea) en términos inmediatos, sin una reforma de la estructura de la educación superior mayoritariamente privada, significa el traslado de los recursos públicos hacia las instituciones privadas, donde además están los sectores más vulnerables. Si todo ello se realiza sin aumentar la oferta pública, se consolidaría para siempre el modelo actual de educación superior, probablemente uno de los más neoliberales del mundo. En efecto, cuando se producen las movilizaciones en 2011, en las organizaciones de estudiantes que las convocan no participan la mayoría de los estudiantes de la educación privada, sino que tales organizaciones corresponden a las federaciones conformadas principalmente por los estudiantes de la educación pública. Por lo tanto, se buscará ampliar la base de representación a los estudiantes de las universidades privadas y también a las instituciones de otros niveles de la educación superior, prácticamente todas privadas. En consecuencia, el movimiento estudiantil se verá entrampado entre las demandas por gratuidad universal y el sentido de su proyecto de hacer

de la educación pública el eje de cualquier proyecto educacional. Algo parecido ocurre con las movilizaciones masivas para terminar con el sistema actual de previsión ("No Más AFP"), ocurridas en el año 2016 y que llevaron al Gobierno a plantear una reforma al sistema de pensiones heredado, atravesadas también por la demanda social de consagrar los fondos solidarios a las cuentas individuales en las mismas instituciones que se quieren eliminar.

Este tipo de contradicciones no pueden resolverlas los movimientos sociales, sino que corresponde a la tarea de los actores políticos, capaces de coordinar, discutir, representar, legitimar soluciones y dar un sentido, más allá de la pura demanda particular, de pertenencia a una polis. Y fue esa vinculación entre institucionalidad política y sociedad lo que se rompió, girando cada una en torno a sus propias dinámicas.

Las falsas interpretaciones de la ruptura

Estamos, así, en presencia de una ruptura entre política institucional y sociedad con una dimensión distinta al distanciamiento entre estos ámbitos que se ha dado generalizadamente en el mundo de hoy y que afecta prácticamente a todos los países. La diferencia estriba, por un lado, en que en Chile se sufre una baja inédita en la participación política a menos del 40% del electorado, mucho más acentuada que en otros contextos donde también se produce la llamada "contrademocracia" o "democracia continua"¹⁶. Por otro lado, estamos hablando de la ruptura o quiebre del modo como se constituían en este país los actores y la sociedad como sujetos, lo que no es igual en otros contextos en que los soportes institucionales y de la sociedad civil logran paliar en parte este distanciamiento.

En este sentido, estamos lejos de las interpretaciones de la situación en términos de malestar o desconfianza. Pueden estos dos aspectos, sin duda, ser consecuencia de la ruptura entre política institucional y sociedad, pero no estamos ante un fenómeno que pueda solo interpretarse en términos de reacciones subjetivas, medibles a través de encuestas (error

16 Pierre Rosanvallon, *La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*. Buenos Aires: Manantial, 2007. Isidoro Cheresky, "Ciudadanía y democracia continua". En: Isidoro Cheresky (comp.), *Ciudadanía y legitimidad democrática en América Latina*. Buenos Aires: Clacso, 2011.

básico en que han caído las ciencias sociales), sino ante un fenómeno estructural, orgánico, de desarticulación o descomposición, que, por supuesto, tiene un componente subjetivo¹⁷. A ello hay que agregar, por lo menos, otros dos elementos. Uno es la dimensión generacional: los sectores jóvenes parecieran no necesitar ni interesarse en la política institucional, buscando otras formas de expresión de su preocupación por lo público¹⁸. El otro, los fenómenos de corrupción que juegan un papel coadyuvante en el distanciamiento entre política y sociedad, permitiendo un discurso legitimador de la crítica radical a la política.

Pero, como hemos dicho, a nuestro juicio la cuestión central es que la gente dejó de tener un eje central que les permita pasar de una suma de individuos, población, categoría social o de género a ser sujetos y actores sociales, es decir, capaces de decidir y controlar su entorno a partir de proyectos sociales. Al perderse este eje, que en Chile era la política, "la gente" se transforma en un conjunto de individuos, producto del modelo económico y de la publicidad, o en un conjunto de intereses particulares que reivindican colectivamente tales intereses. Y este último tipo de reacción¹⁹ tiende a ser de nuevo interpretado equivocadamente como ciudadanía empoderada. En realidad, ciudadanías movilizadas, protestantes, sin duda, pero más bien ilusoriamente empoderadas. Porque precisamente lo que ocurre es que tal ciudadanía deja de serlo en la medida que pierde su instrumento de poder, que era la política y la utilización de las elecciones como el modo de participar en las decisiones de la sociedad.

La encrucijada de la izquierda en Chile

La novedad en el caso chileno actual es que hoy a la ruptura de la relación entre política y sociedad se suma la dispersión de los sectores

17 Ver Gonzalo Delamaza, "Sociedad civil, ciudadanía, movimiento social en el Chile de hoy". En: Garretón, *La gran ruptura...*

18 Ver Raúl Zazuri, "Las transformaciones en la participación política de los jóvenes en el Chile actual". En: Garretón, *La gran ruptura...*

19 Presente en lo que algunos autores llaman "comunidades light". Para el caso de Brasil, ver María Herminia Tavares de Almeida, *The streets, the public in the presidential crisis in Brazil*. Paper presentado al Congreso de LASA, Lima, 2017.

progresistas de izquierda y la involución de los sectores de centro, y entonces queda el terreno fértil para un triunfo de la derecha, que, ante las elecciones presidenciales de 2017, en boca de su candidato significaría demoler lo realizado por el Gobierno de Bachelet.

Se plantea así, en la situación actual, básicamente la misma doble pregunta que estuvo en el origen de los proyectos históricos del ciclo del giro a la izquierda en América Latina y del proyecto del Gobierno de Bachelet en Chile. La pregunta por el modelo o proyecto refundacional, por sacarlo de su empantanamiento, retomararlo y reformularlo incluyendo la dimensión productiva y el proceso constituyente como ejes centrales, es de más difícil respuesta porque, si bien se inició y hay aspectos de difícil vuelta atrás, también ya se organizaron muchas resistencias en su contra.

Pero la otra pregunta es la del sujeto, la de quién replantea el proyecto. Esto quizás sea aún más complejo, por cuanto, por un lado, asistimos a la ya mencionada ruptura entre partidos y sociedad, y por otro, junto a la desaparición del sistema electoral binominal (que hacía imprescindible la unidad del actor democrático opuesto a la derecha heredera de la dictadura), desaparece el actor de centroizquierda —llámese Concertación o Nueva Mayoría— como sujeto del proyecto posible. La inclinación de la Democracia Cristiana por el camino propio y las tentaciones de algunos de sus sectores hacia perspectivas más de centroderecha plantean una incógnita respecto del polo de centro de una coalición progresista. El desperfilamiento de una posición de izquierda en una coalición por parte del socialismo y del PC y la aparición de una izquierda nueva, más cerca de ser una izquierda generacional y testimonial para constituirse como un polo excluyente, complican aún más la constitución del sujeto que retome el proyecto refundacional.

No parece posible la constitución de un sujeto político-partidario que replantee un proyecto para Chile que le permita efectivamente dar el salto interrumpido hacia la sociedad postpinochetista, si no hay la constitución de un polo de izquierda hegemónica —las fuerzas de izquierda que estuvieron en la Nueva Mayoría junto a las fuerzas del Frente Amplio— que replantee una coalición de centroizquierda que sea mayoritaria en el país, pero donde esta vez sea la propuesta de la izquierda la predominante, a diferencia de lo que ocurrió en la coalición posdictatorial. Esta propuesta está fuera del terreno actual de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 2017, por primera vez sin sistema binominal.

Pero incluso aunque se produjeran avances en el plano de las coaliciones partidarias progresistas y de izquierda, tanto respecto de acuerdos para las elecciones parlamentarias como para la segunda vuelta presidencial, ello no asegura por sí solo la reconstitución de la relación de las instancias político-partidarias con el conjunto de la sociedad, las nuevas generaciones, los sectores populares y de nueva pobreza, los llamados sectores medios emergentes, las bases de los movimientos sociales y la intelectualidad. Por supuesto, este es un proceso de larga gestación y dura al menos una generación, pero sin hitos fundantes en que se reencuentren ambas dimensiones —la política institucional y la gente— para constituir verdadera ciudadanía, como en otra época fueron las elecciones, o como podría ser un proceso constituyente, podemos asistir a un proceso permanente de descomposición y recomposición parcial sin horizonte de sociedad.

Conclusión: los desafíos del progresismo

Hay una doble dimensión de la crisis del progresismo en el mundo de hoy que tiene también su expresión en el caso chileno.

Por un lado, la cuestión del proyecto. Recordemos que el progresismo y, por supuesto, la izquierda, tienen como horizonte la superación de la sociedad capitalista y la construcción de una sociedad a la vez libertaria, igualitaria y solidaria, y aunque ello tenga un carácter utópico, es la brújula que permite evaluar los distintos momentos de la sociedad, tanto nacional-estatal como globalizada. Más que una arquitectura de sociedad es una lucha permanente contra las opresiones, dominaciones, explotaciones, desigualdades y alienaciones en cada época o lugar. En el caso chileno, hemos denominado a este proyecto, en su dimensión mínima en los próximos años, como la lucha por la superación de la sociedad pinochetista que abra las posibilidades de nuevos horizontes en este proceso inacabable que hemos mencionado. En el caso latinoamericano más general, se trata de retomar el proyecto posttransición que fue encarnado por el giro a la izquierda. Pero ello supone, como también en el caso chileno, la sustitución del modelo productivo en que se han basado todos estos proyectos por fórmulas menos extractivistas y más sostenibles; la profundización de las igualdades y la inclusión, terminando

con la pobreza, pero abarcando las nuevas formas en que estas se expresan; la transformación de la política, en términos de recoger el desafío que plantean tanto las nuevas identidades como las nuevas formas de convivencia y conectividad, y la visión de la democracia no solo como representación y participación institucionales, sino como proceso permanente de decisión colectiva sobre los destinos de la sociedad (recordemos que Brasil fue el país que más avanzó en fórmulas de democracia participativa y presentó, sin embargo, una de las peores crisis políticas).

Pero si hay una crisis de proyecto progresista en nuestras sociedades, ya sea en su imaginario, diseño o gestión, la hay también en el sujeto que lo pueda construir y encarnar. Tradicionalmente el progresismo reposó en partidos y en la apelación tanto a los sectores más desfavorecidos como a los más innovadores de la sociedad, para realizar su proyecto desde la política y el Estado. En muchas partes del mundo estas bases de sustentación, estos actores, tienden a debilitarse o a desaparecer. Los partidos de izquierda y el movimiento popular basado en clases trabajadoras y medias pierden la capacidad de liderazgo y de universalización de sus aspiraciones, y los llamados nuevos sectores medios emergentes reducen su capacidad innovadora a la defensa de sus intereses particulares.

En estas condiciones, la política tiende a girar en torno a sí misma y a ceder frente a la corrupción, que no es otra cosa que la particularización de los intereses universales. Y los individuos, movimientos y actores sociales buscan formas de autorrepresentación que los llevan a demonizar la política institucional.

Así, hay una crisis de proyecto en el progresismo a nivel latinoamericano, pero hay una cuestión más complicada aún: cuál es el sujeto o cómo se construye un sujeto social político partidario en sociedades en que se transforman profundamente los actores y su relación con la política. Ambas crisis constituyen el desafío del progresismo a nivel global y de cada sociedad.